

**DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN LAS ISLAS BALEARES (pp. 2-
24)**

—

DRET I POLÍTQUES AMBIENTALS A LES ILLES BALEARS (pp. 25-45)

JOSÉ MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ

Departament d'Urbanisme i Territori. Consell Insular de Mallorca

—

Consultor

Universitat Oberta de Catalunya

Sumario: 1. Introducción. 2. Actividad legislativa. 2.1. Se aprueba la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de Ordenación Minera de las Illes Balears. 2.2. El Proyecto de Ley Agraria de las Illes Balears. 2.3. Nuevo decreto regulador de la pesca recreativa y deportiva. 3. Políticas sobre patrimonio natural. 3.1. Declaración de zonas de especial conservación. 3.2. Las fumigaciones aéreas y las políticas de conservación: luces y sombras. 4. Política energética. 4.1. Ayudas al uso de la biomasa como combustible. 4.2. Más sobre las polémicas prospecciones submarinas. 5. Otras noticias ambientales. 5.1. La polémica construcción de un nuevo puerto deportivo: es Molinar. 5.2. Sigue la oposición a la política de carreteras en el Consell de Menorca. 5.3. Tramitación ambiental del Plan Hidrológico de las Islas Baleares. 5.4. Sobre líneas eléctricas y conservación: la cooperación público-privada. 5.4.1. Convenio de reforestación. 5.4.2. Convenio marco de biodiversidad.

1. Introducción

En este número de la revista tratamos de las novedades legislativas del semestre, en el que, además de la aprobación de la Ley de Ordenación y Usos del Suelo, que entró en vigor este verano, se ha aprobado una ley de transportes, una modificación de la Ley de Puertos, una ley de comercio y una ley de ordenación minera que comentaremos en profundidad por la relevancia ambiental que tienen.

Por otro lado, constatamos la trayectoria que ha ido consolidándose en esta legislatura respecto a la relajación de los controles destinados a preservar de manera ordenada las actividades con incidencia ambiental y territorial. Se impone el lema del desarrollo de proyectos, de ocupación de los espacios rurales, de utilización de la costa como recurso económico con la implantación de nuevas infraestructuras, de la desaparición de zonas húmedas, de la implantación de carreteras desmesuradas y así un largo etcétera.

El modelo de desarrollo máximo no siempre ha dado buenos resultados en nuestras islas; entre sus consecuencias cabe destacar el boom de la construcción, que ha dejado un sector muy dañado, el desplazamiento del sector industrial por el efecto del monocultivo turístico o la marginalidad del sector agrario. Desgraciadamente, seguimos con la implantación del mismo esquema, sin extraer de ello lecciones ni consecuencias.

Por todo ello, en este número hablaremos de la nueva Ley 10/2014, de 1 de octubre, de Ordenación Minera de las Illes Balears, del Proyecto de Ley Agraria de las Illes Balears y del nuevo decreto regulador de la pesca recreativa y deportiva.

También, y con respecto a las políticas sobre patrimonio natural, podemos dar la buena noticia de la declaración de zonas de especial conservación (ZEC), que tendrá como contrapunto la controversia en torno a las fumigaciones aéreas con relación a las políticas de gestión forestal: luces y sombras en el horizonte. Comentaremos algunos detalles de la política energética tomando como ejemplo la convocatoria de ayudas al

uso de la biomasa como combustible y la controversia derivada de las polémicas prospecciones submarinas.

Finalmente, detallaremos otras noticias ambientales relativas a la no menos polémica construcción de un nuevo puerto deportivo que desfigura el barrio palmesano del Molinar; la oposición a la política de carreteras del Consell de Menorca; un detalle jurídico procedimental con relación a la tramitación ambiental del Plan Hidrológico de las Islas Baleares; y dos noticias positivas sobre líneas eléctricas y conservación.

Estos y otros temas los podremos examinar con más amplitud a continuación.

2. Actividad legislativa

2.1. Se aprueba la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de Ordenación Minera de las Illes Balears

La actividad legislativa de este curso parlamentario nos ha traído también una ley reguladora de la actividad minera en las Islas Baleares. Según podemos leer en la exposición de motivos de la norma, se ha querido dar respuesta a la necesidad histórica de ordenar las actividades extractivas en un territorio insular frágil y limitado, las cuales, a su vez, tienen una importancia económica nada despreciable.

Los dos primeros párrafos de la exposición son una declaración de principios que intentan mantener el equilibrio en el frágil concepto jurídico de la orden de prevalencia de los intereses ambientales ante los intereses económicos.

Esta ley pretende dar respuesta a una necesidad evidente en las Illes Balears, que es la regulación integral, moderna y eficaz del sector minero balear y, a la vez, la conciliación de un bien jurídico fundamental y digno de protección, como es el medio ambiente, con otro, no menos digno de protección, como es el desarrollo económico, la creación de riqueza y el empleo.

El sector de la minería, en las Illes Balears mayoritariamente representado por la explotación de canteras, tiene una más que notable relevancia socioeconómica, si bien, por su propia naturaleza, muchas veces deriva en una relación conflictiva con una normativa medioambiental en constante crecimiento y un desarrollo especializado.

Sobre esta cuestión, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han tenido que trabajar a fondo los conceptos en juego para mantener una opción razonable,

dado que ambos son valores amparados por el título I, dentro del capítulo III, de los principios rectores de la política social y económica. Por una parte, el artículo 45 CE obliga a los poderes públicos a velar por la utilización racional de los recursos naturales, y, por otra, el artículo 128 CE afirma que toda la riqueza está subordinada al interés general. Los dos principios parecen complementarios y perfectamente armonizables, pero en la práctica no es así. Las tensiones entre medio ambiente y desarrollo derivadas de las actividades extractivas se pueden analizar en sentencias como la STC 64/1992, de 4 de noviembre (“proteger el medio natural, con relación a las actividades extractivas, no provoca perjuicio de la riqueza nacional”; “es constitucional la protección proporcionada del medio ambiente afectado por explotaciones mineras”); la STC 102/1995, de 26 de junio, que consolida el camino en la jurisprudencia mayoritaria sobre la prioridad del medio ambiente respecto a las actividades extractivas (“limitación de las actividades humanas que generen agresiones al medio ambiente o riesgos potenciales”, “identifica la minería como una actividad especialmente alteradora del medio natural”); o la STC 170/1989, de 19 de octubre, que plantea el problema de las prohibiciones genéricas no justificadas de manera singular, de manera que hay que analizar caso a caso el objetivo de congeniar los dos intereses en juego (“no admitiría una sustracción general a la riqueza nacional mediante la prohibición genérica de la minería en un espacio natural protegido”, “es necesario analizar la zonificación del espacio y la gradación de los valores del mismo”). Por otra, también han fijado doctrina sobre el tema la STS de 6 de mayo de 1998, la STS de 18 de diciembre de 1997, la STS de 26 de diciembre de 1989, la STSJPB de 7 de abril de 1995 y la STSJIB de 3 de mayo de 1996.

La base argumental de esta revisión del régimen minero en las Baleares se encuentra en la obsolescencia de la legislación estatal (Ley 22/1973, de 21 de julio), que el legislador balear considera preconstitucional, desfasada respecto de la normativa ambiental comunitaria —incluida la relativa al agua— y necesitada de una revisión en profundidad.

Así, dice la nueva Ley:

Por otra parte, la regulación estatal vigente, dado que es preconstitucional, está desfasada desde el punto de vista organizativo y no responde a las necesidades de planificación estratégica del sector, desconoce el reparto competencial entre el

Estado y las comunidades autónomas y carece de un marco de intervención administrativa ágil y moderno.

Con respecto a la legislación de protección ambiental, la mayor parte ha surgido con posterioridad a la legislación estatal de minas y ha ordenado ámbitos diversos, como los residuos, la ordenación del territorio, el impacto ambiental, el control integrado de la contaminación y la evaluación ambiental estratégica. En consecuencia, la normativa minera tiene que adecuarse a esta nueva situación, dado que es indispensable disponer de un marco normativo coherente y actualizado que se haga eco de las innovaciones tecnológicas y ambientales, así como de los cambios institucionales producidos en España.

En cualquier caso, tendremos que analizar si realmente la Ley apuesta por este equilibrio que proclama una vez que nos introducimos en el articulado y la aplicación de las normas que incorpora —a menudo las exposiciones de motivos no mantienen la debida cohesión con el despliegue real del articulado—.

Con respecto a la estructura de la Ley, esta se articula en seis títulos, que distribuyen desde una perspectiva clásica las disposiciones normativas, desde las destinadas a fijar un marco general hasta el régimen sancionador, pasando por las previsiones competenciales, las de procedimiento y las sustantivas. Así, el título I se destina a las disposiciones generales y establece el objeto, el ámbito de aplicación y los principios orientadores de la Ley. Igualmente, se incluyen las correspondientes definiciones —cuya finalidad es facilitar la comprensión de situaciones específicas a la hora de aplicar la normativa— y previsiones, que incorporan novedades como la definición del concepto de extracción ocasional, de manera que solo se considera como objeto de la Ley la extracción que, amparándose en un carácter ocasional, supere unos determinados límites.

Por otro lado, el título II se destina a regular las competencias administrativas, estableciendo el régimen y las funciones coordinadoras del Govern de les Illes Balears entre las diversas administraciones: estatal, autonómica, insulares y locales. El título III fija el régimen de los llamados derechos mineros y establece con esta rúbrica genérica algunas de las cuestiones fundamentales de la Ley. A continuación, el título V se destina a la coordinación con otras legislaciones aplicables y establece así mecanismos que posibiliten este objetivo, tanto respecto de otras normas como entre las diversas administraciones, con la instauración de una fase previa de consultas entre las

administraciones afectadas y el promotor. También aparece aquí una novedad singular, y es que se prevé explícitamente, con respecto a los municipios con explotaciones o proyectos mineros, la voluntad del Govern de les Illes Balears de favorecer actuaciones concretas y planes de actuación específicos mediante la suscripción de convenios con estos municipios y con la participación del sector empresarial.

Finalmente, el título VI se destina al régimen sancionador. Así, el capítulo I despliega el apartado relativo a la disciplina minera y establece las previsiones necesarias para efectuar la inspección minera con plenas garantías; el capítulo II se refiere al régimen disciplinario, con una regulación específica de algunos aspectos del régimen sancionador; y, finalmente, el capítulo III desarrolla las previsiones en materia de infracciones y sanciones.

De una lectura más a fondo del texto podemos extraer una primera conclusión relativa a la prevalencia del interés económico respecto de los valores ambientales a defender, lo que contraviene en parte la doctrina jurisprudencial que hemos destacado al comienzo de este análisis. Esto se desprende de una serie de previsiones dispersas y de matices en el articulado que tendrán que ser examinados con más detalle en un análisis monográfico.

Con todo, podemos extraer el ejemplo de la disposición adicional segunda, que vuelve a la línea que ya han instaurado anteriormente disposiciones como la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo, o la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears. Estas leyes incluyen soluciones para la legalización de construcciones y de actividades ilegales —en todo o en parte— mediante mecanismos de perdón (incluida la llamada “tasa de perdón” que prevé la LOUS). En este caso, se trata de la “legalización de las edificaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a la fabricación de cerámicas para la construcción”.

Esta disposición dice:

1. Las edificaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a la fabricación de cerámicas para la construcción, ubicadas en suelo rústico y existentes a la entrada en vigor de esta ley, se considerarán ajustadas a la legalidad y asimiladas a las realizadas con licencia, con independencia de la categoría de suelo en que se ubiquen, siempre que dentro del plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley presenten una solicitud de legalización ante el ayuntamiento correspondiente, junto con:

- a) La documentación gráfica y escrita referida a las edificaciones o instalaciones que se quieren legalizar.
 - b) La documentación que acredite la existencia de las edificaciones e instalaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/1988, de 1 de junio, de edificios e instalaciones fuera de ordenación, con independencia que estas hayan sido objeto de reformas o ampliaciones posteriores.
 - c) Una declaración responsable firmada por el titular de la actividad donde se declare el cumplimiento de la normativa sectorial que resulte de aplicación.
2. Esta legalización restará sujeta al pago de las mismas tasas y de los mismos impuestos previstos en la normativa para las nuevas edificaciones.

Como se puede comprobar, esta disposición mimetiza y concreta la previsión de la disposición transitoria décima (procedimiento extraordinario de incorporación a la ordenación de edificaciones existentes en suelo rústico) de la Ley 2/2014, que prevé que las edificaciones existentes en suelo rústico respecto de las cuales a la entrada en vigor de esta ley ya no procediera adoptar las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, por manifiesta prescripción de la infracción según la normativa de aplicación, se podrán incorporar a la ordenación en el plazo máximo de tres años con todos los derechos y deberes inherentes a las obras realizadas con licencia.

Estas previsiones sirven para dejar constancia del fracaso de los mecanismos de control administrativo ante la comisión de infracciones en materia urbanística, turística y de actividades extractivas o industriales. El mensaje que emiten las señaladas disposiciones es que la comisión de ilegalidades permite consolidar —en un gran número de supuestos— derechos que nunca se deberían haber conseguido en aplicación del régimen legal vigente; por el contrario, quien cumpliendo la ley no realizó actuaciones no permitidas ahora ve que los “ilegales” se benefician de la tolerancia de la Administración, en clara vulneración del principio de legalidad y de igualdad, lo que da para pensar en la dimensión inconstitucional de estas amnistías. Habrá que esperar a posibles cuestiones de inconstitucionalidad que se puedan suscitar.

2.2. El Proyecto de Ley Agraria de las Illes Balears

Seguimos con la actividad legislativa, que solo con respecto a este año 2014 nos ha proporcionado, hasta el cierre de esta edición, once leyes, algunas de ellas de gran

relevancia como: la de ordenación y uso del suelo, la de transportes terrestres y movilidad sostenible, la de protección de las personas consumidoras y usuarias, la de puertos, la de ordenación minera o la de comercio. Después de que el Parlamento aprobara este paquete legislativo, ahora es el turno de la ordenación de la actividad agraria, que ya cuenta con un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno en fecha 12 de septiembre de 2014.

La memoria elaborada con la articulación del proyecto considera que el sector agrario es un sector estratégico, especialmente en su vertiente de producción extensiva, por el papel fundamental que juega en el mantenimiento del territorio y del paisaje. Otra cosa es que, en la práctica, el suelo rústico común en las Islas Baleares está siendo destinado en muchos casos para usos residenciales extensivos (viviendas unifamiliares aisladas), usos turísticos (establecimientos con destinación turística en el medio rural), usos complementarios, industria de transformación agraria, equipamientos, infraestructuras, o protección y educación ambiental, todo ello de conformidad con la matriz de ordenación de suelo rústico creada en las directrices de ordenación territorial y en los planes territoriales insulares. Algunas de las leyes mencionadas antes propician la legalización de los usos señalados o facilitan su implantación.

Por ello, al menos en un plano teórico, el proyecto aprobado busca resolver los problemas del sector agrario balear con medidas para fomentar la inversión y la ocupación en el sector primario, a la vez que adopta previsiones de puesta en valor del patrimonio rural que faciliten la gestión activa del territorio y del medio ambiente a partir de la actividad agraria. Desde una perspectiva finalista, se busca impulsar una ley que, con un enfoque global, regule la agricultura y el desarrollo rural con el fin de corregir los desequilibrios económicos derivados de los inconvenientes de la insularidad, que se evidencian en una escasa rentabilidad de las explotaciones agrarias y en el consiguiente abandono progresivo de estas y, en general, del medio rural.

La vía de solución que propone el legislador abre las puertas al desarrollo de actividades complementarias agroturísticas de diversificación de la actividad agraria y regula la venta directa de productos en las mismas explotaciones, en una línea de terciarización parcial del suelo rústico.

Una novedad sorprendente —y que rompe la orientación vigente en la legislación básica de monte— es el hecho de que el Proyecto de Ley considera el sector forestal como una actividad agraria, con especial atención al impulso de su gestión y en busca de un valor

de mercado de los aprovechamientos forestales, principalmente la biomasa, con la finalidad de generar economía y ocupación, mantener los ecosistemas y prevenir los incendios forestales.

En este sentido, hay que recordar que el artículo 5 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, cuando fija el concepto de monte, dice:

1. A los efectos de esta ley, se entiende por monte todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.

Por otro lado, tienen también la consideración de monte: los terrenos yermos y los rocosos y los arenales; las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio de los bosques en los que se sitúan; los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y los plazos que determine la Comunidad Autónoma, y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal; todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se destine a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la normativa aplicable; y los enclaves forestales en terrenos agrícolas con la superficie mínima determinada por la Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, el Proyecto de Ley Agraria sustrae o invade aspectos sustantivos propios de la legislación forestal, normativa que tradicionalmente excluía de la consideración de monte los terrenos dedicados al cultivo agrícola, así como los terrenos urbanos y aquellos otros que excluya la Comunidad Autónoma en su normativa forestal y urbanística.

Por otro lado, el proyecto aprobado busca dar facilidades para el inicio y el desarrollo de la actividad agraria y la complementaria, que quedarán reconocidas como usos admitidos en el medio rural y no estarán sometidas a la declaración de interés general, lo que sustrae también el ejercicio de un control previsto en la normativa en materia urbanística y de ordenación territorial, con un nuevo desplazamiento competencial. Asimismo, el Proyecto de Ley posibilita el cambio de uso de edificios existentes para llevar a término actividades complementarias de diversificación agraria o instalar agroindustrias de transformación de la producción propia, actividades e instalaciones

que habían estado prohibidas o condicionadas a la legislación reguladora de los usos en suelo rústico.

Finalmente, hay que hacer notar que se trata de un texto extenso, ya que el Proyecto de Ley Agraria de las Illes Balears contiene 179 artículos, divididos en un título preliminar, diez títulos, cinco disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, nueve disposiciones finales y un anexo.

2.3. Nuevo decreto regulador de la pesca recreativa y deportiva

El 1 de agosto de 2014 el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma aprobó un reglamento de desarrollo parcial de la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura en las Illes Balears (de la cual hablamos en un número anterior de la RCDA: vol. 4, núm. 2, 2013). Con este despliegue normativo se regula la pesca recreativa y deportiva en las aguas de las Islas Baleares, una actividad de gran arraigo entre la población isleña con innegables impactos económicos y, también, ecológicos.

Como se desprende del preámbulo, este nuevo reglamento no es una modificación de la normativa anterior, sino una sustitución completa que deroga el régimen anterior y unifica y adapta la normativa de las aguas interiores a la regulación estatal. La nueva disposición también se articula para establecer los principios generales o requisitos mínimos que tienen que regir la actividad en todo el territorio de las Islas Baleares, adaptándose a la nueva situación creada a partir de la entrada en vigor de la mencionada Ley 6/2013, de 7 de noviembre.

El despliegue parcial de la Ley persigue ordenar una práctica que cuenta con una gran tradición en Baleares, tanto desde la costa como desde embarcaciones o submarina, y que posiblemente sea una de las actividades de ocio con más aficionados. En este sentido, destaca como modificación más significativa la obligatoriedad, por parte de todas las embarcaciones en las que se quiera practicar la pesca recreativa, de la obtención de la licencia de pesca para embarcación, en vez de la licencia individual, lo que podemos interpretar como una flexibilización del control. Otra novedad destacable es la articulación de medidas dirigidas a dificultar la venta furtiva de pescado procedente de la pesca recreativa, aunque habrá que esperar al resultado de la aplicación de la norma para contrastar la eficacia de esta intención inicial.

Las principales modificaciones respecto de la regulación anterior inciden en la adaptación de la normativa autonómica a la fijada para las aguas exteriores por el Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores, para cuestiones de eficacia y al objeto de crear una gestión homogénea de los recursos pesqueros en las aguas de Baleares. Esta homogeneización tiene su principal reflejo en materia de licencias de pesca recreativa, pero también en la ordenación de los campeonatos de pesca.

Como ya hemos comentado, la licencia de pesca recreativa individual ya no servirá para pescar desde una embarcación, pasando a ser válida únicamente para la pesca desde tierra. La duración de la licencia de pesca recreativa individual pasa de dos a tres años. Asimismo, y vista la escasa demanda y operatividad de la licencia de pesca marítima recreativa colectiva y visto que esta figura no se contempla en el Real Decreto 347/2011 mencionado anteriormente, se ha optado por suprimirla a la espera de que el Estado la regule.

Por otro lado, en relación con la licencia para la pesca submarina y, según se afirma, con la finalidad de conseguir una mayor eficacia en la tramitación, se ha considerado necesario suprimir la obligatoriedad para los pescadores de obtener también la licencia federativa para poder llevar a cabo esta modalidad de pesca y posibilitar la presentación de documentación alternativa, aunque la presentación de la licencia federativa continúa siendo la mejor opción. Esta previsión no deja de plantear dudas prácticas con respecto a los sistemas de control.

El reglamento también prevé medidas relativas a la limitación de las cantidades sometidas a la actividad mediante la implantación de cuotas. Así, aunque se mantiene la cuota general de 5 kg por pescador y día, se abre la puerta a la ampliación del número de especies sometidas a cuotas especiales como los cefalópodos (10 piezas) y los galanes (50 piezas), que son las especies que tienen cuotas específicas; asimismo, se incorporan nuevas medidas con relación a las tallas mínimas.

Finalmente, con respecto al reparto competencial en materia de pesca entre el Govern y los consejos insulares (cuestión no exenta de polémica), el reglamento distingue entre principios generales y normas complementarias o conexas a fin de coordinar la actividad que ejercen los consejos insulares en las competencias que tienen atribuidas como propias. Así pues, las disposiciones normativas ahora aprobadas pueden ser

desplazadas, en cada isla, por la normativa que los consejos insulares dicten en ejecución de la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, que en el artículo 5.2 dice:

2. El Gobierno de las Illes Balears, oídos los consejos insulares, debe dictar los principios generales de conservación de los recursos marinos. Para reforzar la eficacia de éstos, se procurará actuar de manera coordinada con la Administración del Estado en las aguas de su competencia.

El problema del reparto competencial en materia de pesca es tratado en la Ley recurriendo al concepto de “administraciones competentes para la preservación de los recursos marinos”.

El artículo 6 de la Ley dice:

3. La aprobación de los planes de gestión o de recuperación a que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior, cuando sean de ámbito pluriinsular corresponde a la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

4. El resto de medidas señaladas en el apartado 2 de este artículo, si abarcan un ámbito pluriinsular, también han de ser adoptadas por la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears. No obstante, los consejos insulares, en el ejercicio de las competencias que les son propias y en sus respectivos ámbitos territoriales, pueden reforzarlas o ampliarlas.

Tanto en la Ley como en el desarrollo reglamentario parcial se juega con un reparto competencial singular y específico que hay que tener presente. La regla general es atribuir la función coordinadora al Govern, así como la defensa de intereses suprainsulares. El resto de funciones y competencias restan “insularizadas”.

3. Políticas sobre patrimonio natural

3.1. Declaración de zonas de especial conservación

En desarrollo de la Directiva del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves silvestres (79/409/CEE) y de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, una vez declarados los lugares de importancia comunitaria y las zonas de especial protección para las aves, debe procederse a la declaración de las llamadas zonas de especial conservación.

En las Islas Baleares el procedimiento de declaración de ZEC se encontraba en un estado de parálisis que se ha roto finalmente con la reanudación de la tramitación. Así, el Consejo de Gobierno, en sesión de 10 de octubre de 2014, ha procedido a completar el procedimiento para declarar zonas de especial conservación que incluyen 137 LIC y 55 ZEPA. Esta medida es importante si consideramos el hecho de que en las Islas Baleares hay 221.119,5 hectáreas terrestres y marinas declaradas LIC y 138.591 hectáreas consideradas ZEPA, lo que implica una significativa superficie sometida a medidas de especial conservación.

Ahora, con el mencionado acuerdo del Consejo de Gobierno, se inicia el procedimiento para declarar zonas de especial conservación (ZEC) 50 lugares de importancia comunitaria (LIC), tal como exigen las directivas europeas y la normativa estatal en materia de protección de espacios naturales. Con este proceso, el Govern completará la declaración ZEC de todos los lugares de importancia comunitaria de las Islas Baleares, que son 137, y de las zonas de especial protección para las aves (ZEPA), que son 55, un proceso que se inició en agosto de 2013, cuando el Govern aprobó los trámites para declarar 87 LIC como ZEC.

La creación de ZEC implica también la elaboración de los planes de conservación apropiados. Así, para poder iniciar el procedimiento de declaración de estas nuevas ZEC, la Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático ya ha empezado a elaborar los instrumentos de gestión correspondientes de las zonas seleccionadas (LIC y ZEPA), que se concentrarán en doce planes de gestión y cuatro incorporaciones en los planes de gestión empezados el mes de agosto para incluir los LIC marinos. Esta agrupación de planes responde a criterios de proximidad geográfica de las zonas seleccionadas, homogeneidad de hábitats y coincidencia dentro de espacios naturales protegidos y, en el caso de los LIC marinos, a la conexión física y ecológica con los espacios terrestres. Una vez que se hayan elaborado los borradores de estos planes de gestión, empezará un proceso de participación e información pública de estos, que se aprobarán finalmente mediante un decreto del Govern de les Illes Balears.

Aunque con mucho retraso, al fin se cierra un ciclo, al menos sobre el papel, que permite completar las previsiones de las mencionadas directivas de aves y de hábitats.

3.2. Las fumigaciones aéreas y las políticas de conservación: luces y sombras

Un tema recurrente que parecía aparcado durante los últimos quince años es el de las fumigaciones aéreas como medida de lucha contra determinadas plagas forestales. Cuando parecía que no se reproducirían las polémicas fumigaciones, se hace público que el Consejo de Gobierno del 18 de julio de 2014 había aprobado destinar dos millones de euros para actuaciones en sanidad forestal en todas las islas. Examinado el destino de estos recursos, se comprueba que se trataba de una partida de un total de 2.193.887,46 euros para actuaciones de sanidad forestal a realizar en toda la Comunidad a lo largo de este año y de 2015. Concretamente, el ejecutivo destinaba 1.681.466,98 euros al tratamiento aéreo de la procesionaria en las islas de Mallorca y Menorca, y, además, también se aprobaba destinar 512.420,48 euros para otras actuaciones en materia de sanidad forestal que se realizan desde la Dirección General de Medio Natural a través de la Red Balear de Seguimiento de Daños en los Bosques de las Islas Baleares. Así, se anunciaba que el tratamiento aéreo contra la procesionaria se realizaría durante el otoño mediante avionetas y helicópteros que volarían a primeras horas de la mañana, siempre que no existieran las limitaciones meteorológicas estrictas que exige el tratamiento. El objetivo era reducir los niveles de población de la procesionaria del pino de la manera más efectiva posible, ya que los medios aéreos pueden llegar a zonas abruptas e inaccesibles y depositar los productos fitosanitarios con un mayor índice de éxito.

La memoria de la actuación informaba de que en Mallorca se tratarían 24.010 hectáreas, 16.863 mediante avioneta y 7.147 mediante helicóptero. En Menorca se tratarían 3.018,59 hectáreas, 1.788,09 mediante avioneta y 1.230,50 mediante helicóptero. A esta actuación también había que añadir la que se debía realizar en las Pitiusas, con una afectación menos importante y donde el Govern destinaba 95.571,61 euros. En concreto, la superficie a tratar en Ibiza era de 1.088,65 hectáreas de pinar y la de Formentera, de 303,20 hectáreas, donde había que evitar la propagación de una plaga que se consideraba no presente en la Pitiusa menor.

Iniciadas las fumigaciones, estas obtuvieron una fuerte respuesta de colectivos y ciudadanos, con gran repercusión en los medios de comunicación, lo que conllevó la suspensión anticipada del programa, que al final ha tenido un alcance más limitado. Así, el Govern ha tratado 23.148 hectáreas, un 10,5% de toda la superficie forestal, durante la campaña contra la procesionaria de las cerca de 28.500 hectáreas previstas

inicialmente. El Govern comunicó el 30 de octubre que finalizaba la campaña del tratamiento aéreo contra la procesionaria del pino y dio los datos de las superficies que mencionamos aquí.

De las 23.148 hectáreas tratadas finalmente desde que el pasado 11 de octubre se iniciara la actuación contra esta plaga, en Mallorca se han tratado 20.428,24 ha, en Menorca, 1.530 ha, y en Ibiza, 1.190 ha. El Govern ha justificado la utilización de las fumigaciones aéreas ante el incremento sustancial de la población de procesionaria que se ha constatado durante los últimos años y las consecuencias nocivas que esto tiene para la salud de las masas forestales, así como las molestias que ocasiona a la población que vive cerca de bosques. Igualmente, se ha defendido oficialmente que el tratamiento aéreo es el más efectivo para acceder a zonas abruptas y para tratar de manera eficaz áreas extensas.

De este tratamiento se han exceptuado las masas de agua o zonas húmedas y una zona de seguridad de 100 m a su alrededor; los asentamientos apícolas, así como una franja de seguridad de 100 m a su alrededor; las explotaciones de agricultura ecológica existentes según el Consejo Balear de Producción Agraria Ecológica (CBPAE), así como un perímetro de 100 m a su alrededor; y los núcleos urbanos, donde también se ha mantenido una franja mínima de seguridad de 100 m en los casos en que eran limítrofes con zonas de tratamiento. Tampoco se han tratado zonas declaradas LIC o ZEPA incluidas en la red Natura 2000. No obstante, han existido denuncias que afirman que esas distancias no se han respetado y que se ha afectado a zonas habitadas, incluso zonas escolares. Estas incidencias —se defiende el Govern— han sido puntuales y debidas a posibles errores cartográficos que habrían ocasionado el tratamiento sobre núcleos urbanos.

El producto fitosanitario utilizado durante el tratamiento (Dimilin Oleoso B) está autorizado por la Unión Europea y por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Las informaciones del Govern afirmaban que el producto tiene la categoría mínima de afectación a los humanos y a la fauna y que también es compatible con las abejas. El producto no se mezcla con gasóleo, sino con aceite mineral autorizado en agricultura ecológica. También se aducía el hecho de que el producto se aplica desde hace muchos años y que es utilizado en campañas similares en otras comunidades autónomas como Andalucía, País Vasco, Extremadura, Madrid o Murcia. También se destacaba el hecho de que el plan de tratamiento aéreo en las Islas Baleares había sido

autorizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) con fecha de 10 de septiembre de 2014 para Ibiza y Formentera y de 3 de octubre para Mallorca y Menorca. Sin embargo, las fumigaciones no han estado exentas de polémica y desentierran prácticas que hacía muchos años que ya no se realizaban en las Islas.

4. Política energética

4.1. Ayudas al uso de la biomasa como combustible

La investigación en energías alternativas no se detiene en la generación a gran escala de la energía solar y la fotovoltaica, que por primera vez se incluirán en el Plan Director Energético de las Islas Baleares, aunque de momento solo se ha avanzado en una propuesta que se encuentra en trámite ambiental. Ahora, para potenciar la implantación de la biomasa como combustible para usos térmicos, se ha lanzado en Baleares una línea de subvenciones de 300.000 euros, cofinanciada en un 50% por el fondo FEDER. A esta convocatoria pueden concurrir empresas, asociaciones empresariales y administraciones locales.

El objetivo no es solo fomentar el uso de las energías renovables, sino también impulsar el ahorro y la racionalización del uso de la energía en cada uno de los sectores económicos para minimizar el incremento de la demanda energética. Así, las empresas y asociaciones empresariales, como también los consejos insulares, los ayuntamientos y las entidades locales menores, se han podido acoger a las ayudas para compensar los gastos derivados de nuevas instalaciones de producción de energía térmica que utilicen la biomasa como combustible, con una potencia mínima de 20 kW térmicos. Igualmente, se ha abierto una línea de subvención, con la Unión Europea, para la adquisición de maquinaria nueva específica para el tratamiento de la biomasa en el campo mediante astillamiento y empaquetado, así como para las plantas de fabricación de *pellets* o briquetas.

En el caso de las empresas y asociaciones empresariales, la subvención alcanzaba hasta el 35% del coste de la inversión, mientras que, para las administraciones locales, este porcentaje era del 50% de la inversión. En todos los casos, la subvención máxima por beneficiario no podía superar los 50.000 euros y los beneficiarios se han tenido que

comprometer a destinar las instalaciones o la maquinaria durante cinco años a la finalidad concreta por la cual han recibido la subvención.

Según la memoria que justifica la línea de ayudas, la biomasa que se puede utilizar en las Islas como combustible para usos térmicos es autóctona y de origen vegetal y proviene de restos de poda, limpiezas forestales o residuos agrícolas como la cáscara de almendra. Una de las ventajas de esta producción energética es que se transforma un residuo en un recurso que presenta emisión neutra de gases contaminantes como el CO₂, por lo que no contribuye al cambio climático.

Por otro lado, la biomasa es un recurso renovable y local, lo que favorece la dinamización de la economía rural. Tanto el combustible de origen agrícola como el de origen forestal se han convertido en una energía con ventajas, como son: la protección medioambiental derivada de la emisión cero de CO₂ y la protección contra incendios de los bosques derivada de su limpieza y aprovechamiento.

4.2. Más sobre las polémicas prospecciones submarinas

El asunto de las prospecciones submarinas sigue siendo noticia en las Baleares y en las Islas Canarias. La controversia es máxima debido a la gestión opaca y a las afirmaciones contradictorias que el Govern realiza con relación a su posicionamiento.

A la vista del éxito de las movilizaciones de la campaña Balears diu NO, el Govern se ha visto obligado a trasladar al secretario de Estado de Medio Ambiente la negativa de las Islas Baleares a las prospecciones, pero, por otro lado, cuando las propuestas llegan al Congreso o al Senado, el voto de la mayoría parlamentaria del partido que apoya al Govern de les Illes Balears es contrario a la paralización de los sondeos.

De cualquier modo, se ha hecho llegar el rechazo político y social a los proyectos de prospecciones petrolíferas que algunas empresas pretenden realizar en el Mediterráneo. Así, durante una reunión mantenida en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los representantes autonómicos de las comunidades de Valencia y Baleares se interesaron por la situación en la que se encuentra la tramitación medioambiental de los diferentes proyectos de prospecciones petrolíferas, en particular los que pretende ejecutar la empresa Cairn Energy en aguas del golfo de Valencia, que afectan a ambas comunidades. Igualmente, preocupa el trámite de

autorización ambiental, que está pendiente de la emisión de la declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio.

Desde el Govern se ha manifestado que se tengan en cuenta todas las consecuencias que podrían tener estas actuaciones con el único objetivo de que la declaración de impacto ambiental sea negativa. Asimismo, se ha manifestado el propósito de recurrir a la vía judicial para defender la postura del ejecutivo autonómico en caso de que la declaración de impacto ambiental no resulte negativa.

De los proyectos que afectan a las Islas Baleares, el que se sitúa en el golfo de Valencia, a unos 50 kilómetros de las costas de Ibiza, es el que se encuentra en una fase más avanzada. El plazo para que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente emita la declaración de impacto ambiental concluye el 3 de diciembre (con la edición de esta crónica ya cerrada) y de este veredicto dependerá que el proyecto se rechace o que continúe su tramitación hacia el Ministerio de Industria.

En cuanto a los otros dos proyectos de prospecciones que también afectan a las Islas Baleares (en la zona del golfo de León y en el Mediterráneo occidental), el Govern balear, a través de la Comisión de Medio Ambiente, ha solicitado al Ministerio que el primero de ellos vuelva a someterse a la tramitación de evaluación de impacto ambiental al haberse reactivado el pasado mes de mayo, después de un archivo provisional en enero al expirar el plazo que disponía el promotor para completar esta tramitación. Con respecto al segundo, está pendiente de iniciarse la evaluación de impacto ambiental y la Comisión balear ya ha expresado su oposición en fase de información previa.

5. Otras noticias ambientales

5.1. La polémica construcción de un nuevo puerto deportivo: es Molinar

El litoral urbano de Palma, en una zona de interés turístico, se ve ahora amenazado por la construcción de un puerto deportivo donde ahora existe una pequeña cala con las instalaciones de un club marítimo. Este abrigo artificializado configura un rincón bien adaptado a la costa y con unas dimensiones que encajan en la morfología de un barrio de baja densidad y características tradicionales que merece protección especial.

En el *Boletín Oficial del Estado* (BOE), número 249, del martes 14 de octubre de 2014, se publicó el siguiente anuncio: “Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por el que se somete a información pública el proyecto básico presentado por el Club Marítimo Molinar de Levante el 29.08.2014, de renovación y mejora del Club Marítimo Molinar de Levante del Puerto de Palma de Mallorca [...]”.

Un simple examen de la documentación permite concluir que nos encontramos ante el proyecto de un nuevo puerto deportivo que nada tiene que ver con el abrigo actual. Es una nueva implantación de un puerto que hoy no existe, dado que la actual infraestructura desaparece bajo la nueva implantación. Causa extrañeza, por ello, el hecho de que el proyecto tramitado reciba el nombre de “Renovación y mejora del Club Marítimo Molinar de Levante”, cuando claramente se trata de una nueva implantación de un puerto deportivo que sustituye por completo el actual (que desaparece definitivamente).

El anuncio propició un fuerte rechazo popular en el barrio, con más de 15.000 firmas recogidas en contra del proyecto y la creación de una plataforma de entidades que se articulan con el nombre de *Salvem es Molinar*, que ha promovido la campaña “Al Molinar, Port Petit”, que ha implicado incluso a intelectuales y artistas que apoyan la movilización. A modo de ejemplo, mencionaremos la figura del artista Miquel Barceló, que donó una obra gráfica con alusión al “port petit”.

La plataforma está constituida por Amigos de la Tierra, Greenpeace, ARCA, GOB Mallorca, la asociación de vecinos *Vogar i Ciar*, y el movimiento ciudadano *Salvem es Molinar*. Contra el proyecto se han presentado además cerca de 800 alegaciones.

Estas entidades muestran el desacuerdo con la implantación en el barrio de un puerto de estas características y defienden una solución pactada de auténtica renovación y mejora de las instalaciones actuales que permita mantener las actividades náuticas en beneficio e interés del Molinar y que posibilite la conservación de la función social que cumple el Club Marítimo Molinar de Levante.

En el fondo de la discusión se plantea jurídicamente una batalla con relación al hecho de que el nuevo puerto deportivo no se encuentra previsto en ningún instrumento de ordenación del Puerto de Palma de entre los recogidos en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, lo que impide que por la vía del artículo 71

del TRLPEMM se pueda ahora construir la nueva infraestructura a cambio de una ampliación de la concesión. Dicho de otra manera, si no se prevén en estos planes previos que tienen carácter normativo las ampliaciones de las instalaciones ni los efectos que estas implantaciones puedan tener en las concesiones o en la gestión de la Autoridad Portuaria, no tendrían que tramitarse, en especial cuando se trata de un proyecto de estas características. Así se desprende del artículo 77.2 del TRLPEMM, una disposición prevista para cualquier tipo de ocupación de espacio portuario.

Igualmente, existe controversia con relación a la rapidez de la tramitación del proyecto por el hecho de que el promotor ha sustituido un primer proyecto considerado desproporcionado por un segundo completamente diferente y que tiene como característica el hecho de que pretende ser más atractivo para la opinión pública (nueva morfología y una reducción de las dimensiones, aunque triplica las del puerto actual).

En otro frente, se considera que la vía de la inversión para obtener una prórroga concesional, que comporta la construcción de un puerto completamente nuevo, es una forma de huida de la ley, que obliga a aplicar el principio de concurrencia mediante competencia de proyectos o concurso público. Y es que toda concesión de dominio público y de servicio público tiene que asentarse en el interés general y cumplir unos requisitos que en este caso ni parecen cumplirse ni se acreditan.

Por otro lado, se critica el fuerte impacto paisajístico sobre la configuración litoral, las zonas de baño y el barrio, además de otros efectos colaterales importantes como el de la movilidad en un barrio con accesos complejos y limitados.

Igualmente, las entidades y los expertos han manifestado que esta franja de litoral no es el lugar adecuado para construir un puerto deportivo, dado que la batimetría existente no es adecuada para incorporar la nueva tipología de embarcaciones que se pretende atraer. Las dimensiones de las pequeñas embarcaciones que utilizan las instalaciones actuales no necesitan el puerto que ahora se propone, por lo que el proyecto esconde una pretensión de crecimiento de esloras, mangas y calado. Por este motivo, la propuesta altera notablemente las condiciones de esta zona litoral, dado que la operación requerirá acciones de dragado que ocasionarán impactos reconocidos al fondo marino y a las zonas de baño de las playas urbanas próximas.

Una nueva amenaza de destrucción del litoral, con nueva polémica.

5.2. Sigue la oposición a la política de carreteras en el Consell de Menorca

En Menorca sigue adelante el proyecto de construcción de las macrorrotondas de la carretera general a pesar de los esfuerzos de la campaña “Així NO”, que no ha conseguido hacer cambiar de opinión a los responsables del Consell menorquín. La adjudicación y el inicio de las obras conllevan que se imponga la irracionalidad de otro proyecto que no encaja en la reducida escala insular. Tampoco en este caso la implicación de artistas, músicos e intelectuales ha servido para detener esta política de destrucción del paisaje y el carácter isleño.

Tras acciones de gobierno como esta, hay excusas del tipo “si no construimos la nueva carretera, perderemos el dinero del convenio con el Ministerio...”, posicionamiento manifestado en diferentes ocasiones en los plenarios de la institución insular. En realidad, todo depende de una visión del modelo a seguir, y en este caso se sigue el lema de propiciar el desarrollo urbanístico como modelo para impulsar la reactivación económica de Menorca. Mirando hacia las otras islas, podemos comprobar que el modelo a seguir no tiene que ser este, los resultados son evidentes. Hace falta una nueva economía, pero no se puede construir sobre la base de la destrucción, en especial de la desaparición de los valores naturales y paisajísticos de una isla que tiene en estos elementos su mayor atractivo.

5.3. Tramitación ambiental del Plan Hidrológico de las Islas Baleares

El nuevo Plan Hidrológico de las Islas Baleares ha iniciado la tramitación ambiental, y, de acuerdo con la disposición adicional duodécima del texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio), la Dirección General de Recursos Hídricos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio ha abierto un período de consulta pública de seis meses de la propuesta de revisión del Plan Hidrológico de las Islas Baleares para el ciclo 2015-2021.

Sobre esta cuestión, llama la atención el hecho de que la tramitación ambiental se iniciara sobre la base del esquema de temas importantes (ETI) y en ausencia de un documento de propuesta de Plan Hidrológico. El documento de referencia (el que determina el alcance y los contenidos de lo que será el informe de sostenibilidad ambiental) se ha elaborado sobre la base de un documento inexistente, en clara contravención de aquello que prevé el artículo 79 del Real Decreto 907/2007, de 6 de

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. Concretamente, el apartado 5 de este artículo afirma:

5. Al mismo tiempo, el esquema provisional será puesto a disposición del público, durante un plazo no inferior a seis meses para la formulación de observaciones y sugerencias, todo ello en la forma establecida en el artículo 74. Durante el desarrollo de esta consulta se iniciará el procedimiento de evaluación ambiental del plan con el documento inicial, que incorporará el esquema provisional de temas importantes.

En el caso que nos ocupa, el procedimiento ambiental no se ha iniciado con el documento de propuesta de planificación, sino con el ETI, cuando este documento es en realidad un análisis preliminar que tiene que integrarse y formar parte del Plan Hidrológico, mientras que este segundo es el documento que se tiene que someter a evaluación ambiental estratégica.

De hecho, el apartado 6 señala lo siguiente:

6. Ultimadas las consultas a que se refieren los apartados 4 y 5, los organismos de cuenca realizarán un informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias que se hubiesen presentado e incorporarán las que en su caso consideren adecuadas al esquema provisional de temas importantes en materia de gestión de las aguas, que requerirá el informe preceptivo del Consejo del Agua de la demarcación.

Es decir, establece que en la consulta pública se tienen que incorporar las propuestas, observaciones y sugerencias en el ETI, y se someterá a informe del Consejo del Agua. En cambio, en el caso que comentamos, el trámite en el Consejo Balear del Agua se ha realizado sobre el ETI y sobre una propuesta de Plan Hidrológico que no ha pasado el trámite ambiental; y todo eso antes de agotar el plazo de seis meses de consulta convocado (de hecho, casi antes de ser convocado).

Habrá que estar atentos a las vicisitudes de esta tramitación y a las consecuencias de los defectos en que se puede haber incurrido. Un tema de debate jurídico procedimental realmente interesante.

5.4. Sobre líneas eléctricas y conservación: la cooperación público-privada

5.4.1. Convenio de reforestación

Para cerrar esta crónica, pondremos un nuevo ejemplo de cooperación entre una administración pública y una empresa privada en el marco del mecenazgo o patrocinio de proyectos o, incluso, como una especie de custodia privada del territorio. Así, el Govern de les Illes Balears y Red Eléctrica han firmado un convenio para restaurar una zona degradada en Artà y han elaborado un protocolo en materia de biodiversidad.

La finalidad del acuerdo es reforestar la finca pública de sa Duaia-es Racó, en Artà. Igualmente, se ha suscrito un convenio marco de biodiversidad en el cual se establecen las líneas generales de colaboración entre ambas entidades. Eso hará posible la recuperación de una parte importante de la finca pública sa Duaia, afectada por un incendio en 2013. De esta manera, se repoblará parte de la zona quemada; en concreto, 36 hectáreas con especies arbóreas autóctonas como el pino, la encina y el acebuche. Las tareas de reforestación empezarán el próximo mes de noviembre de 2014 y está previsto que duren hasta febrero de 2015.

El término municipal de Artà sufrió un incendio el 20 agosto del año pasado que arrasó 496 hectáreas, superficie que en un 50% se encuentra dentro de los límites de la finca pública de sa Duaia, propiedad del Institut Balear de la Natura (IBANAT). Se trata de una zona protegida por la Ley de Espacios Naturales del Govern de les Illes Balears e incluida en la red Natura 2000 como LIC (lugar de interés comunitario) y como ZEPA (zona de especial protección para las aves).

Para llevar a cabo el proyecto, con un presupuesto de 165.629 euros, Red Eléctrica aportará 120.000 euros y el IBANAT, el resto. El IBANAT se hará cargo de la dirección del proyecto y del suministro de las plantas y especies necesarias, mientras que Red Eléctrica se encargará de la contratación de los trabajos destinados a la reforestación de la zona a través de empresas locales para impulsar el desarrollo socioeconómico y la ocupación “verde” del sector forestal insular.

Red Eléctrica enmarca esta restauración forestal en el proyecto “El Bosque de Red Eléctrica”, que la empresa desarrolla a escala nacional. Se trata de un programa ambiental que, desde el año 2009, la compañía impulsa con el objetivo de colaborar en la conservación de espacios naturales ricos en biodiversidad y en la recuperación de zonas.

5.4.2. Convenio marco de biodiversidad

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio y Red Eléctrica han suscrito, además, un convenio marco de colaboración sobre conservación de la biodiversidad, con relación al desarrollo y mantenimiento de la red de transporte de energía eléctrica en las Islas Baleares, con el objetivo de minimizar el impacto de estas infraestructuras en el patrimonio natural a través de proyectos ambientales que contribuyan a la mejora de los entornos naturales en que se ubican las instalaciones de la compañía.

A medida que se concreten las actuaciones derivadas de este convenio, cuya duración inicial es de cinco años, se formalizarán los correspondientes protocolos específicos de colaboración.

Sumari:1. Introducció. 2. Activitat legislativa. 2.1. S'aprova la Llei 10/2014, d'1 d'octubre, d'ordenació minera de les Illes Balears. 2.2. El Projecte de llei agrària de les Illes Balears. 2.3. Nou decret regulador de la pesca recreativa i esportiva. 3. Polítiques sobre patrimoni natural. 3.1. Declaració de zones d'especial conservació. 3.2. Les fumigacions aèries i les polítiques de conservació: llums i ombres. 4. Política energètica. 4.1. Ajudes per utilitzar la biomassa com a combustible. 4.2. Més qüestions sobre les polèmiques prospeccions submarines. 5. Altres notícies ambientals: 5.1. La polèmica construcció d'un port esportiu nou: es Molinar. 5.2. Continua l'oposició a la política de carreteres al Consell de Menorca. 5.3. Tramitació ambiental del Pla Hidrològic de les Illes Balears. 5.4. Sobre línies elèctriques i conservació.

1. Introducció

En aquest número de la revista donem compte de les novetats legislatives del semestre, en què a més de les aprovacions de la Llei d'ordenació i usos del sòl, que ha entrat en vigor aquest estiu, s'ha aprovat la llei de transports, la modificació de la llei de ports, la llei de comerç, i la llei d'ordenació minera, que comentarem en profunditat, per la rellevància ambiental que té.

D'altra banda, constatem la trajectòria que s'ha anat consolidant en aquesta legislatura pel que fa a la relaxació dels controls que haurien de preservar ordenadament les activitats amb incidència ambiental i territorial. S'imposa el lema del desenvolupament de projectes, d'ocupació dels espais rurals, d'utilització de la costa com a recurs econòmic amb la implantació de noves infraestructures, de la desaparició de zones humides, de la implantació de carreteres desmesurades, i així un llarg etcètera.

El model de desenvolupament màxim no sempre ha donat bons resultats a les nostres illes, el boom de la construcció ha deixat un sector molt damnificat, el desplaçament del sector industrial per l'efecte del monocultiu turístic n'és un altre exemple, i la marginalitat del sector agrari, també. Malauradament continuem amb la implantació del mateix esquema, sense treure'n lliçons ni conseqüències.

Per això, en aquest número parlarem de la nova Llei 10/2014, d'1 d'octubre, d'ordenació minera de les Illes Balears, del Projecte de llei agrària de les Illes Balears i del nou decret regulador de la pesca recreativa i esportiva.

També, i pel que fa a les polítiques sobre patrimoni natural, podrem donar la bona notícia de la declaració de zones d'especial conservació (ZEC), que té com a contrapunt la controvèrsia al voltant de les fumigacions aèries amb relació a les polítiques de conservació: llums i ombres a l'horitzó. Comentarem la política energètica amb l'exemple de la convocatòria d'ajudes per utilitzar la biomassa com a combustible, i la controvèrsia derivada de les polèmiques prospeccions submarines.

Finalment, detallarem altres notícies ambientals relatives a la no menys polèmica construcció d'un nou port esportiu que desfigura el barri palmès del Molinar; l'oposició a la política de carreteres al Consell de Menorca; un detall jurídic procedimental amb relació a la tramitació ambiental del Pla Hidrològic de les Illes Balears, i acabarem amb dues notícies positives sobre línies elèctriques i conservació.

Aquests i altres temes els podrem analitzar amb més amplitud a continuació.

2. Activitat legislativa

2.1. S'aprova la Llei 10/2014, d'1 d'octubre, d'ordenació minera de les Illes Balears

L'activitat legislativa d'aquest curs parlamentari ens ha portat també la llei reguladora de l'activitat minera a les Illes Balears. Segons podem llegir en l'exposició de motius del text articulat, s'ha volgut donar resposta a la necessitat històrica d'ordenar les activitats extractives en un territori insular fràgil i limitat, però que al seu torn tenen una importància econòmica gens menyspreable.

Els dos primers paràgrafs de l'exposició són una declaració de principis que intenten mantenir l'equilibri en el fràgil concepte jurídic de l'ordre de prevalença dels interessos ambientals davant els interessos econòmics.

Aquesta llei pretén donar resposta a una necessitat evident a les Illes Balears, que és la regulació integral, moderna i eficaç del sector miner balear i, a la vegada, la conciliació d'un bé jurídic fonamental i digne de protecció, com és el medi ambient, amb un altre, no menys digne de protecció, com és el desenvolupament econòmic, la creació de riquesa i l'ocupació.

El sector de la mineria, a les Illes Balears majoritàriament representat per l'explotació de pedreres, té una més que notable rellevància socioeconòmica, si bé, per la seva pròpia naturalesa, moltes vegades deriva en una relació conflictiva amb una normativa mediambiental en constant creixement i un desplegament especialitzat.

Sobre aquesta qüestió, tant el Tribunal Suprem com el Tribunal Constitucional, han hagut de treballar a fons els conceptes en joc per mantenir una opció raonable, atès que ambdós són valors emparats pel títol i, en el capítol III, dels principis rectors de la política social i econòmica. D'una banda, l'article 45 CE obliga els poders públics a vetllar per la utilització racional dels recursos naturals, i, d'altra banda, l'article 128 CE

afirma que tota la riquesa està subordinada a l'interès general. Els dos principis semblen complementaris i perfectament harmonitzables, però a la pràctica no és així. Les tensions entre medi ambient i desenvolupament derivades de les activitats extractives, es poden analitzar en sentències com la STC 64/1992, de 4 de novembre (...protegir el medi natural, amb relació a les activitats extractives, no provoquen perjudici de la riquesa nacional (...); (...) és constitucional la protecció proporcionada del medi ambient afectat per explotacions mineres...); o la STC 102/1995, de 26 de juny, que consolida el camí a la jurisprudència majoritària sobre la prioritat del medi ambient envers les activitats extractives (...limitació de les activitats humanes que generin agressions al medi ambient o riscos potencials (...)) (...) identifica la mineria com una activitat especialment alteradora del medi natural...); la STC 170/1989, de 19 d'octubre, que planteja el problema de les prohibicions genèriques no justificades de manera singular, de manera que cal analitzar cada cas pel que fa a la conjuminació dels dos interessos en joc (...no admetria una sostracció general a la riquesa nacional mitjançant la prohibició genèrica de la mineria en un espai natural protegit(...) (...) cal analitzar la zonificació de l'espai i la gradació dels seus valors...). D'altra banda, també han fixat doctrina sobre el tema les STS de 6 de maig de 1998, STS de 18 de desembre de 1997, STS de 26 de desembre de 1989, STSJPB de 7 d'abril de 1995, o la STSJIB de 3 de maig de 1996.

La base argumental d'aquesta revisió del règim miner a les Balears es troba en l'obsolescència de la legislació estatal (Llei 22/1973, de 21 de juliol), que el legislador balear considera preconstitucional, desfasada respecte de la normativa ambiental comunitària —inclosa la relativa a l'aigua—, i que necessita revisar-se en profunditat.

Així, diu la nova llei:

D'altra banda, la regulació estatal vigent, atès que és preconstitucional, està desfasada des del punt de vista organitzatiu i no respon a les necessitats de planificació estratègica del sector, desconeix el repartiment competencial entre l'Estat i les comunitats autònomes i hi manca un marc d'intervenció administrativa àgil i modern.

Pel que fa a la legislació de protecció ambiental, la major part ha sorgit amb posterioritat a la legislació estatal de mines i ha ordenat àmbits diversos, com ara els residus, l'ordenació del territori, l'impacte ambiental, el control integrat de la contaminació i l'avaluació ambiental estratègica. En conseqüència, la normativa minera s'ha d'adequar a aquesta nova situació, atès que és indispensable disposar

d'un marc normatiu coherent i actualitzat que es faci ressò de les innovacions tecnològiques i ambientals, com també dels canvis institucionals produïts a Espanya.

En qualsevol cas haurem d'analitzar si realment la llei aposta per aquest equilibri que proclama un cop ens endinsem en l'articulat i l'aplicació de les normes que incorpora —sovint les exposicions de motius no mantenen la deguda cohesió amb el desplegament real de l'articulat.

Pel que fa a l'estructura de la llei, s'articula en sis títols, que distribueixen des d'una perspectiva clàssica les disposicions normatives, des de les destinades a establir el marc general, fins al règim sancionador, passant per les previsions competencials, les de procediment, i les substantives. Així, el títol I es destina a les disposicions generals, i estableix l'objecte, l'àmbit d'aplicació i els principis orientadors de la llei. Igualment, s'inclouen les corresponents definicions —la finalitat de les quals és facilitar la comprensió de situacions específiques a l'hora d'aplicar la normativa—, i previsions que incorporen novetats com ara la definició del concepte d'extracció ocasional, de manera que només es considera com a objecte de la llei l'extracció que, emparant-se en un caràcter ocasional, superi determinats límits.

D'altra banda, el títol II regula les competències administratives, i estableix el règim i les funcions coordinadores del Govern de les Illes Balears entre les diferents administracions: l'estatal, l'autonòmica, les insulars i les locals. El títol III fixa el règim dels anomenats drets miners, i estableix amb aquesta rúbrica genèrica algunes de les qüestions fonamentals de la llei. A continuació, el títol V es destina a la coordinació amb altres legislacions aplicables, i estableix mecanismes que possibilitin aquest objectiu tant respecte d'altres normes com entre les diverses administracions, amb la instauració d'una fase prèvia de consultes entre les administracions afectades i el promotor. També hi apareix una novetat singular, i és que es preveu explícitament, pel que fa als municipis amb explotacions o projectes miners, la voluntat del Govern de les Illes Balears d'afavorir actuacions concretes i plans d'actuació específics mitjançant la subscripció de convenis amb aquests municipis i amb participació del sector empresarial.

Finalment, el títol VI es destina al règim sancionador. Així, el capítol I desplega l'apartat relatiu a la disciplina minera i estableix les previsions necessàries per efectuar la inspecció minera amb plenes garanties; el capítol II fa referència al règim disciplinari,

amb la regulació específica d'alguns aspectes del règim sancionador; i, finalment, el capítol III desplega les previsions pel que fa a infraccions i sancions.

D'una lectura més a fons del text en podem treure la primera conclusió relativa a la prevalença de l'interès econòmic respecte dels valors ambientals que caldria defensar, contravenint en part a la doctrina jurisprudencial que hem esmentat en la primera part d'aquesta anàlisi. Això es desprèn d'una sèrie de previsions disperses i de matisos en el articulat que s'haurien d'analitzar amb més detall en alguna anàlisi monogràfica.

Amb tot, podem extreure l'exemple de la disposició addicional segona, que torna a la línia que ja han instaurat anteriorment disposicions com la Llei 2/2014, de 23 de març, d'ordenació i ús del sòl, o la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears. Aquestes lleis inclouen solucions per a la legalització de construccions i d'activitats il·legals —en tots els aspectes o en part— mitjançant mecanismes de perdó (inclosa l'anomenada taxa del perdó que preveu la LOUS). En aquest cas, es tracta de la «legalització de les edificacions, construccions i instal·lacions vinculades a la fabricació de ceràmiques per a la construcció».

Aquesta disposició diu:

1. Les edificacions, construccions i instal·lacions vinculades a la fabricació de ceràmiques per a la construcció, ubicades en sòl rústic i existents a l'entrada en vigor d'aquesta llei, es consideren ajustades a la legalitat i assimilades a les que s'han realitzat amb llicència, amb independència de la categoria de sòl en què s'ubiquin, sempre que en el termini de tres anys a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta llei presentin una sol·licitud de legalització davant l'ajuntament corresponent, juntament amb:

a) La documentació gràfica i escrita referida a les edificacions o instal·lacions que es volen legalitzar.

b) La documentació que acrediti l'existència de les edificacions i instal·lacions amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 8/1988, d'1 de juny, d'edificis i instal·lacions fora d'ordenació, amb independència que aquestes hagin estat objecte de reformes o ampliacions posteriors.

c) Una declaració responsable signada pel titular de l'activitat en què es declari el compliment de la normativa sectorial aplicable.

2. Aquesta legalització està subjecta al pagament de les mateixes taxes i dels mateixos impostos previstos en la normativa per a les noves edificacions.

Com podem comprovar, aquesta disposició és mimètica i concreta la previsió de la disposició transitòria desena (procediment extraordinari d'incorporació a l'ordenació d'edificacions existents en sòl rústic), de la Llei 2/2014, que preveu que les edificacions existents en sòl rústic respecte de les quals a l'entrada en vigor d'aquesta llei ja no procedís adoptar les mesures de restabliment de la legalitat urbanística, per manifesta prescripció de la infracció segons la normativa d'aplicació, es poden incorporar a l'ordenació en el termini màxim de tres anys, amb tots els drets i deures inherents a les obres que s'han dut a terme amb llicència.

Aquestes previsions serveixen per deixar constància del fracàs dels mecanismes de control administratiu davant la comissió d'infraccions tant des del punt de vista urbanístic, com turístic, com pel que fa a activitats extractives o industrials. El missatge que emeten les disposicions que hem assenyalat és que la comissió d'il·legalitats permet consolidar drets que mai no s'haurien d'haver assolit —en un gran nombre de supòsits—d'acord amb el règim legal vigent; per contra, els qui en compliment de la llei van deixar de fer actuacions no permeses, ara veuen com els “il·legals” es beneficien de la tolerància de l'Administració, en clara vulneració del principi de legalitat i d'igualtat, la qual cosa fa pensar en la dimensió inconstitucional d'aquestes amnisties. Caldrà esperar possibles qüestions d'inconstitucionalitat que es puguin suscitar.

2.2. El Projecte de llei agrària de les Illes Balears

Continuem amb l'activitat legislativa, que només pel que fa al 2014, ens ha proporcionat, fins al tancament d'aquesta edició, onze lleis, algunes de les quals de gran rellevància, com ara: la d'ordenació i ús del sòl, la de transports terrestres i mobilitat sostenible, la de protecció de les persones consumidores i usuàries, la de ports, la d'ordenació minera o la de comerç. Després que el Parlament aprovés aquest paquet legislatiu ara és el torn de l'ordenació de l'activitat agrària, que ja té un projecte de llei aprovat pel Consell de Govern en data 12 de setembre de 2014.

La memòria que s'ha elaborat amb l'articulació del projecte, considera que el sector agrari és un sector estratègic, especialment en la vessant de producció extensiva, pel paper fonamental que representa en el manteniment del territori i del paisatge. Una altra cosa és que a la pràctica el sòl rústic comú a les Illes Balears, es destina en molts casos a usos residencials extensius (habitatges unifamiliars aïllats), usos turístics (establiments

amb destinació turística al medi rural), usos complementaris, indústria de transformació agrària, equipaments, infraestructures, o protecció i educació ambiental, tot això d'acord amb la matriu d'ordenació de sòl rústic creada a les Directrius d'ordenació territorial i als plans territorials insulars. Algunes de les lleis que hem esmentat abans, propicien la legalització dels usos assenyalats o en faciliten la implantació.

Per això, almenys en l'àmbit teòric, el projecte que s'ha aprovat busca resoldre els problemes del sector agrari balear, amb mesures per fomentar la inversió i l'ocupació en el sector primari, alhora que adopta previsions de posada en valor del patrimoni rural i que facilitin la gestió activa del territori i del medi ambient a partir de l'activitat agrària. Des d'una perspectiva finalista, es busca impulsar una llei que, amb un enfocament global, reguli l'agricultura i el desenvolupament rural, per corregir els desequilibris econòmics derivats dels inconvenients de la insularitat, que s'evidencien en l'escassa rendibilitat de les explotacions agràries i el seu consegüent abandonament progressiu i, en general, del medi rural.

La via de solució que proposa el legislador obre les portes al desenvolupament d'activitats complementàries agroturístiques de diversificació de l'activitat agrària i regula la venda directa de productes a les explotacions mateixes, en la línia de terciarització parcial del sòl rústic.

Una novetat sorprenent —i que trenca l'orientació vigent a la legislació bàsica de forest—, és el fet que el projecte de llei considera el sector forestal com una activitat agrària, amb especial atenció a l'impuls de la seva gestió i a la recerca d'un valor de mercat dels aprofitaments forestals, principalment la biomassa, amb la finalitat de generar economia i ocupació, mantenir els ecosistemes i prevenir els incendis forestals.

En aquest sentit cal recordar que l'article 5 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forest, quan estableix el concepte de forest diu: “1. A l'efecte d'aquesta Llei, s'entén per forest qualsevol terreny en el qual vegeten espècies forestals arbòries, arbustives, de matoll o herbàcies, sigui espontàniament o procedeixin de sembra o plantació, que compleixin o puguin complir funcions ambientals, protectores, productores, culturals, paisatgístiques o recreatives”.

D'altra banda, també tenen la consideració de forest: els terrenys erms, rocallosos i arenals; les construccions i infraestructures destinades al servei de la muntanya on se situïn; els terrenys agrícoles abandonats que compleixin les condicions i terminis que

determini la comunitat autònoma, i sempre que hagin adquirit signes inequívocs del seu estat forestal; els terrenys que, sense reunir les característiques descrites anteriorment, s'adscriguin a la finalitat de ser repoblat o transformat a l'ús forestal, de conformitat amb la normativa aplicable; i els enclavaments forestals en terrenys agrícoles amb la superfície mínima determinada per la Comunitat Autònoma.

Per tant, el projecte de llei agrícola sostreu o envaeix aspectes substantius propis de la legislació forestal, normativa que tradicionalment excloïa de la consideració de forest: els terrenys dedicats al cultiu agrícola, i també els terrenys urbans i els altres que exclogui la comunitat autònoma en la seva normativa forestal i urbanística.

D'altra banda, el projecte aprovat busca donar facilitats per a la iniciativa i el desenvolupament de l'activitat agrària i complementària, que quedaran reconegudes com a ús admès en el medi rural i no estaran sotmeses a la declaració d'interès general, cosa que sostreu també l'exercici del control previst a la normativa des del punt de vista urbanístic i d'ordenació territorial, amb un nou desplaçament competencial. Encara més, el projecte de llei possibilita el canvi d'ús d'edificis existents per dur-hi a terme activitats complementàries de diversificació agrària o instal·lar-hi agroindústries de transformació de producció pròpia, activitats i instal·lacions que havien estat prohibides o condicionades a la legislació reguladora dels usos en sòl rústic.

Finalment cal fer notar que es tracta d'un text extens, ja que el Projecte de llei agrària de les Illes Balears conté 179 articles, dividits en un títol preliminar, deu títols, cinc disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria, nou disposicions finals i un annex.

2.3. Nou decret regulador de la pesca recreativa i esportiva

En data 1 d'agost de 2014 el Consell de Govern de la comunitat autònoma ha aprovat el reglament de desplegament parcial de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears [de la qual vàrem parlar en un número anterior de la RCDA: vol. 4, núm. 2 (2013)]. Amb aquest desplegament normatiu es regula la pesca recreativa i esportiva a les aigües de les Illes Balears, activitat de gran arrelament entre la població illenca, amb innegables impactes econòmics i, també, ecològics.

Com es desprèn del preàmbul, aquest nou reglament no és una modificació de la normativa anterior sinó una substitució completa que deroga el règim anterior i unifica i adapta la normativa de les aigües interiors a la regulació estatal. També, la nova disposició s'articula per establir els principis generals o requisits mínims que han de regir l'activitat en tot el territori de les Illes Balears, i adaptar-se a la nova situació creada a partir de l'entrada en vigor de l'esmentada Llei 6/2013, de 7 de novembre.

El desplegament parcial de la llei pretén ordenar una pràctica que tant des de la costa com amb embarcació o submarina, té una gran tradició a Balears, on, possiblement, és una de les activitats d'oci amb més aficionats. En aquest sentit, destaca com a modificació més significativa l'obligatorietat, per part de totes les embarcacions en les qual es vulgui practicar la pesca recreativa, de l'obtenció de la llicència de pesca per a embarcacions, en comptes de la llicència individual, fet que podem interpretar com la flexibilització del control. També esdevé una altra novetat destacable, l'articulació de mesures adreçades a dificultar la venda furtiva de peix procedent de la pesca recreativa, tot i que caldrà fixar-se en el resultat de l'aplicació de la norma per contrastar l'eficàcia d'aquesta intenció inicial.

Les principals modificacions respecte de la regulació anterior incideixen en l'adaptació de la normativa autonòmica en la que s'estableix en les aigües exteriors el Reial decret 347/2011, d'11 de març, pel qual es regula la pesca marítima recreativa en aigües exteriors, per qüestions d'eficàcia i amb l'objectiu de crear una gestió homogènia dels recursos pesquers en les aigües de les Balears. Aquesta homogeneïtzació té el seu principal reflex pel que fa a les llicències de pesca recreativa però també dels campionats de pesca.

Com hem comentat, pel que fa a la llicència de pesca recreativa individual, ja no serveix per pescar des d'una embarcació, i únicament és vàlida per a la pesca des de terra. La durada de la llicència de pesca recreativa individual passa de dos a tres anys. Així mateix, i atesa l'escassa demanda i operativitat de la llicència de pesca marítima recreativa col·lectiva, i vist que aquesta figura no es preveu al Reial decret 347/2011, que hem esmentat anteriorment, s'ha optat per suprimir-la, esperant que l'Estat la reguli.

D'altra banda, en relació amb la llicència per a la pesca submarina i, segons s'afirma, amb la finalitat d'aconseguir més eficàcia en la tramitació, es considera necessari suprimir l'obligatorietat dels pescadors d'obtenir també la llicència federativa per poder dur a terme aquesta modalitat de pesca i possibilitar la presentació de documentació

alternativa, tot i que la presentació de la llicència federativa continua essent la millor opció. Aquesta previsió no deixa de plantejar dubtes pràctiques pel que fa als sistemes de control.

El reglament també preveu mesures relatives a la limitació de les quantitats sotmeses a l'activitat; això es regula mitjançant la implantació de quotes que, malgrat que es manté la quota general de 5 kg per pescador i dia, s'obre la porta a l'ampliació del nombre d'espècies sotmeses a quotes especials, com ara els cefalòpodes (10 peces) i els raors (50 peces), que són les espècies que tenen quotes específiques; igualment s'incorporen noves mesures amb relació a les talles mínimes.

Finalment, pel que fa al repartiment competencial sobre pesca entre el Govern i els consells insulars (qüestió no exempta de polèmica), el reglament distingeix entre el que són principis generals i normes complementàries o connexes, a l'efecte de coordinar l'activitat que exerceixen els consells insulars en les competències que tenen atribuïdes com a pròpies. Així, doncs, les disposicions normatives que s'han aprovat ara, poden ser desplaçades, en cada illa, per la normativa que els consells insulars dictin en execució de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, que en l'article 5.2 diu:

2. El Govern de les Illes Balears, oïts els consells insulars, ha de dictar els principis generals de conservació dels recursos marins. Per tal de reforçar-ne l'eficàcia, s'ha de procurar actuar de manera coordinada amb l'Administració de l'Estat en les aigües de la seva competència.

El problema del repartiment competencial pel que fa a la pesca es tracta a la Llei, recurrent al concepte d'“administracions competents per a la preservació dels recursos marins”.

L'article 5 de la Llei diu també:

3. L'aprovació dels plans de gestió o de recuperació a què fan referència les lletres *a)* i *b)* de l'apartat anterior, quan siguin d'àmbit pluriinsular, correspon a l'Administració de la comunitat de les Illes Balears.

4. La resta de mesures que assenyala l'apartat 2 d'aquest article, si abasten un àmbit pluriinsular, també han de ser adoptades per l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. No obstant això, els consells insulars, en l'exercici de les competències que els són pròpies i en els seus respectius àmbits territorials, poden reforçar-les o ampliar-les.

Tant en la Llei com en el desplegament reglamentari parcial, es juga amb un repartiment competencial singular i específic, que cal tenir present. La regla general és atribuir la funció coordinadora al Govern, i també la defensa d'interessos suprainsulars. La resta de funcions i competències resten “insularitzades”.

3. Polítiques sobre patrimoni natural

3.1. Declaració de zones d'especial conservació

En desplegament de la Directiva del Consell de 2 d'abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres (79/409/CEE) i de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, havent estat declarats els llocs d'importància comunitària i les zones d'especial protecció per a les aus, cal procedir a la declaració de les anomenades zones d'especial conservació.

A les Illes Balears el procediment de declaració de ZEC es trobava en un estadi de paràlisi que s'ha trencat finalment amb la represa de la tramitació. Així, el Consell de Govern en sessió de 10 d'octubre de 2014, ha procedit a completar el procediment per declarar zones d'especial conservació que inclouen 137 LIC i 55 ZEPA. Aquesta mesura és important si considerem que a les Illes Balears hi ha 221.119,5 hectàrees terrestres i marines declarades LIC i 138.591 hectàrees considerades ZEPA, fet que implica una superfície significativa sotmesa a mesures d'especial conservació.

Ara, amb l'esmentat acord del Consell de Govern, s'inicia el procediment per declarar zones d'especial conservació (ZEC) cinquanta llocs d'importància comunitària (LIC), tal com exigeixen les directives europees i la normativa estatal pel que fa a la protecció d'espais naturals. Amb aquest procés, el Govern completa la declaració ZEC de tots els llocs d'importància comunitària de les Illes Balears, que són 137, i de les zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA), que són 55, procés que es va iniciar l'agost de 2013, quan el Govern va aprovar els tràmits per declarar 87 LIC com a ZEC.

La creació de ZEC implica també l'elaboració dels plans de conservació escaients. Així, per poder iniciar el procediment de declaració d'aquestes noves ZEC, la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic ja ha començat a elaborar els instruments de gestió corresponents de les zones seleccionades (LIC i ZEPA), que es concentren en dotze plans de gestió i quatre incorporacions als plans de

gestió començats al mes d'agost per incloure-hi els LIC marins. Aquesta agrupació de plans respon a criteris de proximitat geogràfica de les zones seleccionades, homogeneïtat d'hàbitats i coincidència en espais naturals protegits i, en el cas dels LIC marins, a la connexió física i ecològica amb els espais terrestres. Una vegada s'hagin elaborat els esborranys d'aquests plans de gestió, ha de començar un procés de participació i informació pública dels plans, els quals finalment s'han d'aprovar per decret del Govern de les Illes Balears.

Tot i que amb molt de retard, a la fi es tanca un cicle, almenys sobre paper, que permet completar les previsions de les esmentades directives d'aus i d'hàbitats.

3.2. Les fumigacions aèries i les polítiques de conservació: llums i ombres

Un tema recurrent que semblava que s'havia aparcat al llarg dels darrers quinze anys, és el de les fumigacions aèries com a mesura de lluita contra determinades plagues forestals. Quan semblava que no es reproduïrien les polèmiques fumigacions, es fa públic que el Consell de Govern del 18 de juliol de 2014 ha aprovat destinar dos milions d'euros per a actuacions en sanitat forestal a totes les illes. Havent examinat la destinació d'aquests recursos, s'ha comprovat que es tractava d'una partida d'un total de 2.193.887,46 euros per a actuacions de sanitat forestal que s'han de realitzar en tota la comunitat al llarg d'aquest any i de 2015. Concretament, l'Executiu destinava 1.681.466,98 euros al tractament aeri de la processionària a les illes de Mallorca i Menorca, i a més, també s'aprovava destinar 512.420,48 euros per a altres actuacions sobre sanitat forestal que es realitzen des de la Direcció General de Medi Natural, per mitjà de la Xarxa Balear de seguiment de Danys en els Boscos de les Illes Balears.

Així, s'anunciava que el tractament aeri contra la processionària es faria a la tardor, amb avionetes i helicòpters que volessin a primeres hores del matí, sempre que no hi hagin les limitacions meteorològiques estrictes que exigeix el tractament. L'objectiu era reduir els nivells de població de processionària del pi de la manera més efectiva possible, ja que els mitjans aeris poden arribar a zones abruptes i inaccessibles i dipositar els productes fitosanitaris amb un índex més elavat d'incidència.

La memòria de l'actuació informava que a Mallorca es tractarien 24.010 hectàrees, de les quals 16.863 es realitzarien amb avioneta i 7.147 amb helicòpter. A Menorca es tractarien 3.018,59 hectàrees, de les quals 1.788,09 s'aplicarien amb avioneta i 1.230,50

amb helicòpter. A aquesta actuació també hi calia afegir la que s'havia de fer a les Pitiüses, amb una afectació menys important i en la qual el Govern destinava 95.571,61 euros. En concret, la superfície que s'havia de tractar a Eivissa era de 1.088,65 hectàrees de pineda i la de Formentera de 303,20 hectàrees, on calia evitar que es propagués una plaga que es considerava no present a la Pitiüsa menor.

Quan es van iniciar les fumigacions, hi va haver una forta resposta de col·lectius i ciutadans de la qual es van fer ressò els mitjans de comunicació i que ha tingut com a conseqüència la suspensió del programa, que al final ha tingut un abast més limitat. Així, el Govern ha tractat 23.148 hectàrees, un 10,5 % de tota la superfície forestal, durant la campanya contra la processionària, de les prop de 28.500 hectàrees previstes inicialment. El Govern va comunicar el 30 d'octubre que finalitzava la campanya del tractament aeri contra la processionària del pi, i va donar com a dades, les superfícies que hem esmentat aquí.

De les 23.148 hectàrees que es van tractar finalment des que el passat 11 d'octubre s'iniciés l'actuació contra aquesta plaga, a Mallorca s'han tractat 20.428,24 ha; a Menorca, 1.530 ha, i a Eivissa, 1.190 ha. El Govern ha justificat la utilització de les fumigacions aèries en l'increment substancial de la població de processionària que s'ha constatat durant els darrers anys i les conseqüències nocives que això té per a la salut de les masses forestals, com també les molèsties ocasionades entre la població que viu a prop dels boscos. Igualment s'ha defensat oficialment que el tractament aeri és el més efectiu per accedir a zones abruptes i per tractar àrees grans de manera eficaç.

D'aquest tractament se n'han exceptuat les masses d'aigua o zones humides i una zona de seguretat de 100 m al voltant; els assentaments apícoles, i també una franja de seguretat de 100 m; les explotacions d'agricultura ecològica existents segons el Consell Balear de Producció Agrària Ecològica (CBPAE), i un perímetre al seu voltant de 100 m; i els nuclis urbans, on també s'ha mantingut una franja mínima de seguretat de 100 m en els casos en què eren limítrofs amb zones de tractament. Tampoc s'han tractat zones declarades LIC o ZEPA incloses a la Xarxa Natura 2000. No obstant això, hi ha hagut denúncies que afirmen que no s'han respectat aquestes distàncies, que han afectat zones habitades, i fins i tot zones escolars. Aquestes incidències —es defensa el Govern— han estat puntuals i s'han degut a possibles errors cartogràfics que haurien ocasionat el tractament sobre nuclis urbans.

El producte fitosanitari utilitzat durant el tractament (Dimilin Oliós B), està autoritzat per la Unió Europea i pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. El Govern afirma que el producte té la categoria mínima d'afecció als humans i a la fauna, i que també és compatible amb les abelles. El producte no es barreja amb gasoil, sinó amb oli mineral autoritzat en agricultura ecològica. També s'ha publicat que el producte s'aplica des de fa molts anys i que s'utilitza en campanyes similars en altres comunitats autònomes com ara Andalusia, el País Basc, Extremadura, Madrid o Múrcia. També s'ha fet palès que el pla de tractament aeri a les Illes Balears havia estat autoritzat pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) amb data de 10 de setembre 2014 per a Eivissa i Formentera i de 3 d'octubre per Mallorca i Menorca. Tot i això, les fumigacions no han estat exemptes de polèmica i desenterren pràctiques que feia molts anys que ja no es feien a les Illes.

4. Política energètica

4.1. Ajudes per utilitzar la biomassa com a combustible

La recerca en energies alternatives no s'atura en la generació de l'energia solar i fotovoltaica a gran escala, que per primer cop s'inclouran en el Pla Director Energètic de les Illes Balears, tot i que de moment només s'ha avançat en la proposta que es troba en tràmit ambiental. Ara, per potenciar la implantació de la biomassa com a combustible per a usos tèrmics a les Balears s'ha obert una línia de subvencions de 300.000 euros, cofinançada en un 50% pel Fons FEDER. A aquesta convocatòria hi poden concórrer empreses, associacions empresarials i administracions locals.

L'objectiu no és només fomentar l'ús de les energies renovables, sinó també impulsar l'estalvi i la racionalització de l'ús de l'energia en cadascun dels sectors econòmics per minimitzar l'increment de la demanda energètica. Així, les empreses i associacions empresarials, com també els consells insulars, ajuntaments i entitats locals menors s'han pogut acollir a les ajudes per compensar les despeses derivades de noves instal·lacions de producció d'energia tèrmica que utilitzin la biomassa com a combustible, amb una potència mínima de 20 kW tèrmics. Igualment s'ha obert una línia de subvenció, amb la Unió Europea, per a l'adquisició de maquinària nova específica per al tractament de la biomassa al camp, per fer-ne estelles i empaquetar-la, i també per a les plantes de fabricació de pèl·lets o briquetes.

Pel que fa a les empreses i associacions empresarials, la subvenció arribava fins al 35% del cost de la inversió, i per a les administracions locals, aquest percentatge ha estat del 50% de la inversió. En tots els casos la subvenció màxima per beneficiari no podia superar els 50.000 euros i els beneficiaris s'han de comprometre a destinar les instal·lacions o la maquinària a la finalitat concreta per la qual han rebut la subvenció durant cinc anys.

Segons la memòria que justifica la línia d'ajudes, la biomassa que es pot utilitzar a les Illes com a combustible per a usos tèrmics és autòctona i d'origen vegetal i prové de les restes de poda, neteges forestals o residus agrícoles com la clofolla d'ametlla. Un dels avantatges d'aquesta producció energètica és que es transforma un residu en un recurs que presenta emissió neutra de gasos contaminants com el CO₂; per tant, no contribueix al canvi climàtic.

D'altra banda, la biomassa és un recurs renovable i local, la qual cosa afavoreix la dinamització de l'economia rural. Tant el combustible d'origen agrícola com el d'origen forestal s'han convertit en una energia amb avantatges, com són: la protecció mediambiental derivada de l'emissió zero de CO₂ i la protecció contra incendis dels boscos, derivada de la neteja i del seu aprofitament.

4.2. Més qüestions sobre les polèmiques prospeccions submarines

L'afer de les prospeccions submarines continua essent notícia a les Illes Balears i a les Illes Canàries. La controvèrsia és màxima a causa de la gestió opaca i de les afirmacions contradictòries que tenen lloc amb relació al posicionament el Govern de les Illes.

A la vista de l'èxit de les mobilitzacions de la campanya "Balears diu No", el Govern s'ha vist obligat a traslladar al secretari d'estat de Medi Ambient la negativa de les Illes Balears a les prospeccions, però, d'altra banda, quan les propostes arriben al Congrés o al Senat, el vot de la majoria parlamentària del partit que dóna suport al Govern de les Illes Balears, és contrari a la paralització dels sondejos.

De qualsevol manera, s'ha fet arribar el rebuig polític i social als projectes de prospeccions petrolíferes que algunes empreses pretenen dur a terme al Mediterrani. Així, durant la reunió a la seu del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, els representants autonòmics de les comunitats de València i les Balears, es van interessar per la situació en la qual es troba la tramitació mediambiental dels diferents

projectes de prospeccions petrolíferes, en particular els que pretén executar l'empresa Carn Energy a les aigües del golf de València, que afecta ambdues comunitats. Igualment preocupa el tràmit d'autorització ambiental del qual està pendent de l'emissió de la Declaració d'impacte ambiental per part del Ministeri.

El Govern ha manifestat que es tinguin en compte totes les conseqüències que podrien tenir aquestes actuacions amb l'únic objectiu que la Declaració d'impacte ambiental sigui negativa. Així mateix, s'ha manifestat el propòsit de recórrer a la via judicial per defensar la postura de l'Executiu autonòmic en cas que la Declaració d'impacte ambiental no resultés negativa.

Dels projectes que afecten les Illes Balears, el que se situa al golf de València, a uns 50 quilòmetres de les costes d'Eivissa, és el que es troba en una fase més avançada. El termini perquè el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient n'emeti la Declaració d'impacte ambiental conclou el 3 de desembre (amb l'edició d'aquesta crònica ja tancada) i d'aquest veredicta dependrà que el projecte es rebutgi o que en continuï la tramitació al Ministeri d'Indústria.

Quant als altres dos projectes de prospeccions que també afecten les Illes Balears (a la zona del golf de Lleó i al Mediterrani Occidental), el Govern balear, per mitjà de la Comissió de Medi ambient, ha sol·licitat al Ministeri que el primer es torni a sotmetre a tramitació d'avaluació d'impacte ambiental, ja que es va reactivar el passat mes de maig després d'un arxiu provisional al gener en expirar el termini que disposava el promotor per completar aquesta tramitació. Respecte al segon, està pendent d'iniciar-se l'avaluació d'impacte ambiental i la Comissió Balear ja n'ha expressat l'oposició en fase d'informació prèvia.

5. Altres notícies ambientals

5.1. La polèmica construcció d'un port esportiu nou: es Molinar

El litoral urbà de Palma, en una zona d'interès turístic, ara es veu amenaçat per la construcció d'un port esportiu on hi ha una petita cala amb les instal·lacions d'un club marítim. Aquest abric artificialitzat configura un racó ben adaptat a la costa i amb unes dimensions que encaixen en la morfologia d'un barri de baixa densitat i característiques tradicionals que mereixen protecció especial.

En el *Butlletí Oficial de l'Estat* (BOE) número 249, del dimarts 14 d'octubre de 2014, es publicà el següent anunci: “Anunci de l'Autoritat Portuària de Balears pel qual se sotmet a informació pública el projecte bàsic presentat pel Club Marítim Molinar de Llevant el 29.08.2014, de renovació i millora del Club Marítim Molinar de Llevant del Port de Palma de Mallorca [...]”.

El simple examen de la documentació permet concloure que ens trobem davant el projecte d'un port esportiu nou que no té a res veure amb l'abric actual. És una nova implantació d'un port esportiu que avui no existeix, atès que l'actual infraestructura desapareix sota la nova implantació. Això causa estranyesa davant el fet que el projecte tramitat rebí el nom de “Renovació i millora del Club Marítim Molinar de Llevant”, quan clarament es tracta d'una nova implantació d'un port esportiu que substitueix per complet l'actual (que desapareix per complet).

L'anunci ha propiciat un gran rebuig popular al barri, amb més de 15.000 signatures recollides en contra del projecte i la creació d'una plataforma d'entitats que s'articulen amb el nom de “Salvem es Molinar”, que ha promogut la campanya “Al Molinar, Port Petit”, que ha implicat fins i tot intel·lectuals i artistes que donen suport a la mobilització. A tall d'exemple, esmentarem la figura de l'artista Miquel Barceló, que ha fet donació d'una obra gràfica amb al·lusió al “port petit”.

La plataforma està constituïda per Amics de la Terra, Greenpeace, ARCA, GOB Mallorca, l'associació de veïns Bogar i Ciar, i el moviment ciutadà Salvem es Molinar. A més a més, s'han presentat prop de 800 al·legacions contra aquest projecte.

Aquestes entitats mostren el desacord amb la implantació d'un port d'aquestes característiques al barri i preferirien una solució pactada d'autèntica renovació i millora de les instal·lacions actuals, que permetés mantenir les activitats nàutiques en benefici i interès del Molinar i que possibilités la conservació de la funció social que fa el Club Marítim Molinar de Llevant.

En el fons de la discussió es planteja jurídicament una batalla amb relació al fet que el port esportiu nou no s'ha previst en cap instrument d'ordenació del Port de Palma, entre els que recull el Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de ports de l'estat i de la marina mercant, la qual cosa impedeix que per la via de l'article 71 del TRLPEMM, es pugui construir ara la nova infraestructura a canvi de l'ampliació de la concessió. Dit d'una altra manera, si no es preveuen en

aquests plans previs que tenen caràcter normatiu, les ampliacions de les instal·lacions i els efectes que aquestes implantacions puguin tenir en les concessions o en la gestió de l'Autoritat Portuària, no s'haurien de tramitar, especialment quan es tracta d'un projecte d'aquestes característiques. Així de l'article 77.2 del TRLPEMM es desprèn una disposició prevista per a qualsevol mena d'ocupació de l'espai portuari.

Igualment hi ha controvèrsia amb relació a la velocitat que s'ha emprat en la tramitació del projecte, pel fet que el promotor hagi substituït el primer projecte, considerat desproporcionat, pel segon, completament diferent i que té com a característica el fet que pretén ser més atractiu de cara a l'opinió pública (morfologia nova i reducció de les dimensions, tot i que triplica les del port actual).

En un altre front, es considera que la via de la inversió per obtenir una pròrroga concessional, que comporta la construcció d'un port completament nou, és una manera de fugir de l'aplicació de la llei, que obliga a aplicar el principi de concurrència, mitjançant competència de projectes o concurs públic. I és que tota concessió de domini públic i de servei públic ha d'assentar-se en l'interès general i complir uns requisits que en aquest casno sembla que es compleixin ni s'acreditin.

D'altra banda, se'n critica el fort impacte paisatgístic sobre la configuració litoral, les zones de bany i el barri, a més d'altres efectes col·laterals importants, com el de la mobilitat en un barri amb accessos complicats i limitats.

Igualment, les entitats i els experts han manifestat que aquesta franja de litoral no és el lloc adequat per construir un port esportiu, atès que la batimetria existent no és adequada per incorporar la nova tipologia d'embarcacions que es pretén atreure. Les dimensions de les embarcacions petites que recalen actualment no necessiten el port que es proposa. Per tant, el projecte amaga una pretensió de creixement d'eslores, mànigues i calat. Per aquest motiu la proposta altera notablement les condicions d'aquesta zona litoral, atès que l'operació requereix accions de dragatge que generaran impactes reconeguts en el fons marí i en les zones de bany de les platges urbanes properes.

Una nova amenaça de destrucció del litoral, amb nova polèmica.

5.2. Continua l'oposició a la política de carreteres al Consell de Menorca

A Menorca el projecte de construcció de les macrorotondes de la carretera general continua endavant malgrat els esforços de la campanya “Així NO”, que no ha aconseguit fer canviar de parer els responsables del Consell menorquí. L'adjudicació i l'inici de les obres fan que s'imposi la irracionalitat d'un altre projecte que no encaixa en la reduïda escala insular. També en aquest cas la implicació d'artistes, músics o intel·lectuals no ha servit per aturar aquesta política de destrucció del paisatge i del caràcter illenc.

Després d'unes quantes accions de govern com aquesta, hi ha excuses com ara “si no construïm la carretera nova, perdrem els diners del conveni amb el Ministeri...”, posicionament que s'ha manifestat en diferents ocasions als plenaries de la institució insular. En realitat tot depèn d'una visió del model que s'ha de seguir, i en aquest cas se segueix el lema de propiciar el desenvolupament urbanístic com a model per impulsar la reactivació econòmica a Menorca. Mirant altres illes, podem comprovar que el model que cal seguir no ha de ser aquest, els resultats en són evidents. Cal una economia nova, però no es pot construir basant-se en la destrucció, en especial en la desaparició dels valors naturals i paisatgístics d'una illa que té en aquests elements el capital més gran com atractiu.

5.3. Tramitació ambiental del Pla Hidrològic de les Illes Balears

El nou Pla Hidrològic de les Illes Balears ha iniciat la tramitació ambiental, i d'acord amb la disposició addicional dotzena del Text refós de la llei d'aigües (Reial decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol), la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ha obert un període de consulta pública de sis (6) mesos, de la proposta de revisió del Pla Hidrològic de les Illes Balears per al cicle 2015-2021.

Sobre aquesta qüestió, crida l'atenció el fet que la tramitació ambiental s'iniciï basant-se en l'Esquema de Temes Importants (ETI), i en absència del document de proposta de Pla Hidrològic. El document de referència (el que determina l'abast i els continguts del que ha de ser l'informe de sostenibilitat ambiental), s'ha elaborat basant-se en un document inexistent, en clara contravenció del que preveu l'article 79 del Reial decret

907/2007, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Planificació Hidrològica. Concretament, l'apartat 5 d'aquest article afirma:

5. Al mateix temps, l'esquema provisional s'ha de posar a la disposició del públic, durant un termini no inferior a sis mesos per a la formulació d'observacions i suggeriments, tot això en la forma establerta en l'article 74. Durant el desenvolupament d'aquesta consulta s'ha d'iniciar el procediment d'avaluació ambiental del pla amb el document inicial, que ha d'incorporar l'esquema provisional de temes importants.

Pel que fa al cas que ens ocupa, el procediment ambiental no s'ha iniciat amb el document de proposta de planificació, sinó amb l'ETI, document que en realitat és l'anàlisi preliminar que s'ha d'integrar al Pla Hidrològic i formar-ne part, i aquest segon és el document que s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica.

De fet l'apartat 6 diu:

6. Ultimades les consultes al fet que es refereixen els apartats 4 i 5, els organismes de conca han de realitzar un informe sobre les propostes, observacions i suggeriments que s'han presentat i han d'incorporar les que si escau considerin adequades a l'esquema provisional de temes importants pel que fa a la gestió de les aigües, que ha de requerir l'informe preceptiu del Consell de l'Aigua de la demarcació.

Per tant, estableix que en la consulta pública s'hi han d'incorporar les propostes, les observacions i els suggeriments a l'ETI, i s'ha de sotmetre a informe del Consell de l'Aigua. Per tant, en aquest cas que comentem, el tràmit al Consell Balear de l'Aigua s'ha realitzat sobre l'ETI i sobre una proposta de Pla Hidrològic que no ha passat el tràmit ambiental; i tot això abans d'exhaurir els sis mesos de consulta convocats (de fet, gairebé abans de ser convocada).

Cal estar atents a les vicissituds d'aquesta tramitació i a les conseqüències del defectes en què es pot haver incorregut. Es tracta d'un tema de debat jurídic procedimental realment interessant.

5.4. Sobre línies elèctriques i conservació: la cooperació públicoprivada

5.4.1. Conveni de reforestació

Per tancar aquesta crònica, posarem un nou exemple de cooperació entre l'Administració pública i una empresa privada en el marc del mecenatge o patrocini de projectes o, fins i tot, com una mena de custòdia privada del territori. Així, el Govern de les Illes Balears i Red Eléctrica han signat el conveni per restaurar una zona degradada a Artà i han elaborat un protocol pel que fa a la biodiversitat.

La finalitat de l'acord és reforestar la finca pública de sa Duaia-es Racó, a Artà. Igualment, s'ha subscrit un conveni marc de biodiversitat en el qual s'estableixen les línies generals de col·laboració entre ambdues entitats. Això farà possible la recuperació d'una part important de la finca pública sa Duaia afectada per un incendi el 2013. D'aquesta manera, es repoblarà part de la zona cremada; en concret, 36 hectàrees amb espècies arbòries autòctones, com el pi, l'alzina i l'ullastre. Les tasques de reforestació començaran el proper mes de novembre i està previst que durin fins al febrer.

El terme municipal d'Artà va patir un incendi el 20 agost de l'any passat que va arrasar 496 hectàrees, superfície que, en un 50%, es troba dins dels límits de la finca pública de sa Duaia, propietat de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT). Es tracta d'una zona protegida per la Llei d'espais naturals del Govern de les Illes Balears i inclosa a la Xarxa Natura 2000 com a LIC (lloc d'interès comunitari) i com a ZEPA (zona d'especial protecció per a les aus).

Per dur a terme el projecte, amb un pressupost de 165.629 euros, Red Eléctrica aporta 120.000 euros i l'IBANAT, la resta. L'IBANAT es fa càrrec de la direcció del projecte i del subministrament de les plantes i espècies necessàries, mentre que Red Eléctrica s'encarrega de la contractació dels treballs de reforestació de la zona per mitjà d'empreses locals per impulsar el desenvolupament socioeconòmic i l'ocupació verda del sector forestal insular.

Red Eléctrica emmarca aquesta restauració forestal en el projecte "El Bosc de Red Eléctrica", que l'empresa du a terme a escala nacional. Es tracta d'un programa ambiental que, des del 2009, impulsa la companyia amb l'objectiu de col·laborar en la conservació d'espais naturals rics en biodiversitat i en la recuperació de zones.

5.4.2. Conveni marc de biodiversitat

També la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, i Red Elèctrica han subscrit, a més a més, un conveni marc de col·laboració en l'àmbit de la biodiversitat, amb relació al desenvolupament i manteniment de la xarxa de transport d'energia elèctrica a les Illes Balears, amb l'objectiu de minimitzar l'impacte d'aquestes infraestructures en el patrimoni natural a través de projectes ambientals que contribueixin a millorar els entorns naturals on s'ubiquen les instal·lacions de la companyia.

A mesura que es concretin les actuacions derivades d'aquest conveni, la durada inicial del qual és de cinc anys, es formalitzaran els protocols específics de col·laboració corresponents.